



Medellín, once (11) de agosto dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA: RECURSO DE APELACIÓN- ORDINARIO LABORAL

DEMANDANTE: MARÍA MATILDE PEREA PEREA

DEMANDADO: PORVENIR S.A.

RADICADO: 05001-31-05-015-2022-00344-01

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, procede a resolver el recurso de apelación, interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, contra el auto del 12 de abril de 2023, dictado por el JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, mediante el cual se declaró probada la excepción previa de FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA propuesta por PORVENIR S.A. dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia, instaurado por la señora **MARÍA MATILDE PEREA PEREA** en contra de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** (En adelante PORVENIR S.A.).

El presente asunto fue debidamente discutido por los miembros integrantes de la Sala, acogándose el proyecto de providencia presentado por el Magistrado Ponente Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, consignado en los siguientes términos:

ANTECEDENTES:

La actora formuló demanda ordinaria laboral contra PORVENIR S.A., a través de la cual pretende se condene a la sociedad demandada al reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes causada con ocasión del fallecimiento de su hija LUZ MERY ÁLVAREZ PEREA.

La demanda fue admitida mediante auto del 01 de septiembre de 2022 por cumplir con los requisitos de Ley, ordenándose en dicha providencia la notificación a la sociedad demandada.

Una vez notificada, PORVENIR S.A. dio respuesta a la demanda y formuló varias excepciones de fondo, entre ellas la denominada **No existe reclamación de la pensión de sobrevivientes previa ante Porvenir S.A.**, argumentando en síntesis que la accionante presentó la demanda sin haber hecho antes la solicitud formal ante Porvenir S.A. con los documentos que acrediten el derecho que reclama; por manera que, ante dicha omisión, la AFP no ha podido realizar el estudio pertinente con la finalidad de pronunciarse de fondo respecto a la pretensión y si es del caso, proceder con el reconocimiento pensional, es decir que para la entidad, NO existe obligación respecto de las pretensiones de la demanda, pues se le ha quebrantado el derecho de defensa y de oportunidad para pronunciarse de fondo respecto de si hay lugar o no al reconocimiento de la prestación que se ventila.

DECISIÓN DE LA PRIMERA INSTANCIA

La oficina judicial de primera instancia, en audiencia realizada el 12 de abril de 2023, decidió resolver como previa la excepción propuesta por la entidad, argumentando que, en este caso, se evidenciaba **la falta de agotamiento de la reclamación administrativa**, por lo que de conformidad con el numeral 5 del artículo 100 del Código General del Proceso, la parte demandada podía proponer dentro del término del traslado, la excepción por falta de los requisitos formales, que en este caso, era el previo agotamiento de la reclamación administrativa, tal y como lo dispone el artículo 6 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social.

En ese sentido, afirmó que por prestar la sociedad demandada un servicio público, la acción judicial solo podía iniciarse cuando se haya agotado la reclamación.

De otro lado, indicó que, si bien con la demanda se allegó una reclamación elevada por la parte actora presentada a la entidad el 11 de julio de 2022, lo cierto es que PORVENIR S.A. había contestado a la demandante requiriéndola para que aportara la documentación completa y como ello no fue cumplido por la parte actora dentro del término establecido por la entidad, el proceso no había podido finalizar con éxito.

DEL RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la demandante inconforme con la providencia, interpuso recurso de apelación indicando que la actora efectivamente se dirigió a PORVENIR S.A. en repetidas oportunidades, pero por un requisito interno de la AFP los documentos no fueron recibidos, no obstante, la reclamación sí fue radicada el 11 de julio de 2022, solicitando la pensión por el fallecimiento de su hija de manera retroactiva con

intereses moratorios. Por lo anterior, solicita que sea revocada la decisión y se pueda continuar con el proceso, puesto que sí se hizo la reclamación administrativa cumpliendo el requisito en mención.

DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, el apoderado judicial de la demandante presentó alegatos indicando resumidamente que la reclamación administrativa contenida en el artículo 6 del C.P.T. y S.S reza “Las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa ...”, es con base a lo anterior que respetuosamente considero que se dio por parte del a quo una interpretación errónea de la norma citada, puesto que la demanda se dirige contra una entidad privada, tal como fue interpretado por el honorable Tribunal Superior De Distrito Judicial de Pereira en sentencia del 20 de septiembre de 2018:

“[...] Como se puede colegir de la norma acabada de transcribir, la reclamación administrativa no se agota frente a las personas o entidades de derecho privado, como requisito previo a la promoción de la demanda judicial, así se refiera está a un derecho consagrado en la seguridad social, y que imponga, por ende, la demostración de tal reclamación, como anexo del libelo.”

Adicionalmente, mi representada presentó derecho de petición ante PORVENIR solicitando el reconocimiento del derecho que hoy se reclama, entendiéndose así agotado el trámite administrativo, tal como obra en los anexos del escrito de demanda.

Por lo anterior, solicito de manera respetuosa a este Honorable Tribunal, No conceder la excepción planteada por la apoderada de PORVENIR, y como consecuencia de ello darle continuidad al proceso que se adelanta en el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín.

PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER

El problema jurídico para resolver se circunscribe a establecer si era deber de la parte demandante cumplir o no con la obligación de agotar la reclamación administrativa consagrada en el artículo 6 del CPT y de la SS u otra norma legal, respecto de las pretensiones que persiguen el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes frente a PORVENIR S.A.

Por ser competente esta superioridad, para conocer del recurso de apelación contra el auto que resuelve sobre excepciones previas conforme al Art. 65 del CPT y de la SS, se procede a resolver el mismo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La Sala se ocupará del estudio del recurso de apelación, con apego al imperativo contenido en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual: *“La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”*.

En los términos en que quedó sustentado el recurso de apelación, la decisión en esta instancia se circunscribe a establecer si en el presente proceso, a través de la cual pretende el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, la parte demandante cumplió o no con la obligación de agotar la reclamación administrativa establecido en el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

En el trámite del proceso y en la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., en la etapa de decisión de excepciones llevada a cabo el 12 de abril de 2023, la falladora de primera instancia declaró probada la excepción previa de FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA, luego de concluir que la parte actora omitió proceder como lo dispone el artículo 6 del CPTSS, esto es, solicitarle administrativamente a la AFP el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.

El recurrente se duele de la anterior determinación, pues considera que el artículo 6 del CPTSS dispone que con la simple reclamación da por cumplido dicho requisito y que en el presente caso se ha presentado la reclamación administrativa. Adicionalmente, agrega en los alegatos de conclusión, que tal reclamación no es procedente cuando se trata de entidades de derecho privado como lo es PORVENIR S.A.

Analizadas las posturas planteadas, la Sala no comparte los argumentos expuestos por la juez de instancia referidos a la necesidad de agotar previamente la reclamación administrativa de que trata el Art. 6 del C.P.T y la SS, cuando se trata de: *“acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de*

la administración pública.” y en este caso la demanda es una entidad de derecho privado.

No obstante, a juicio de la Sala existen otras normas jurídicas que llevan a la conclusión que la reclamación previa de un derecho a la seguridad social, es necesaria para acudir a la jurisdicción, incluso en la AFP privadas, veamos:

El Art. 2 del CPT y la SS, modificado por el Art. 2 de la Ley 712 de 2001, establece lo siguiente:

ART. 2º—Modificado. L. 712/2001, art. 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:

- 1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo.*
- 2. Las acciones sobre fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral.*
- 3. La suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical.*
- 4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan. (negrilla agregada)*

[...]

A su vez, el Art. 11 del CPT y la SS, modificado por el Art. 8 de la Ley 712 de 2001, preceptúa lo siguiente:

ART. 11.—Modificado. L. 712/2001, art. 8º. Competencia en los procesos contra las entidades del sistema de seguridad social integral. En los procesos que se sigan en contra de las entidades que conforman el sistema de seguridad social integral, será competente el juez laboral del circuito del lugar del domicilio de la entidad de seguridad social demandada o el del lugar donde se haya surtido la reclamación del respectivo derecho, a elección del demandante. (negrilla agregada)

[...]

Además, cabe recordar que el artículo 19 del Decreto 654 de 1994, dictado por el Presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias otorgadas por artículo 139 de la Ley 100 de 1993, particularmente la de establecer el régimen jurídico y financiero de las sociedades administradoras de fondos de pensiones, entre las cuales queda comprendido el Instituto de Seguros Sociales, ARL, previó que el Gobierno Nacional establecería los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, sin que en ningún caso el término para tal efecto excediera de cuatro (4) meses.

Por su parte, el artículo 4º de la Ley 700 de 2001 estableció:

*“**Artículo 4** A partir de la vigencia de la presente ley, los operadores públicos y privados del sistema general de pensiones y cesantías, que tengan a su cargo el reconocimiento del derecho pensional, tendrán un plazo no mayor de seis (6) meses a partir del momento en que se eleve la solicitud de reconocimiento por parte del interesado para adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes.”*

Ahora, el Artículo 33 de Ley 1755 de 2015 establece lo siguiente:

“Artículo 33. Derecho de petición de los usuarios ante instituciones privadas. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, a las Cajas de Compensación Familiar, a las Instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, a las entidades que conforman el sistema financiero y bursátil y a aquellas empresas que prestan servicios públicos y servicios públicos domiciliarios, que se rijan por el derecho privado, se les aplicarán en sus relaciones con los usuarios, en lo pertinente, las disposiciones sobre derecho de petición previstas en los dos capítulos anteriores.”

De las normas legales transcritas en precedencia, se concluye que respecto de las Administradoras de Fondo de Pensiones privadas, es necesario petitionar administrativamente la prestación que se reclama antes de demandar judicialmente, pues solo ante su negativa o su silencio, una vez cumplido el término legal para decidir, se puede considerar que existe un conflicto que debe resolver la jurisdicción, y por ello es exigible que se haya agotado tal reclamación administrativa, no con base en el Art. 6 del C.P.T y la SS, como lo entendió la juez de primera instancia, sino con fundamento en las normas legales antes transcritas que regulan las reclamaciones de las pensiones en las entidades de seguridad social, incluidas las AFP privadas.

Se resalta igualmente que en este caso la parte demandante en la apelación, no se opuso a que la necesidad de la reclamación administrativa era exigible, sino que se limitó a indicar que la reclamación administrativa sí se encontraba agotada, por lo que a este único aspecto se circunscribirá el estudio en segunda instancia.

De esta manera, para entenderse agotado el trámite de la reclamación administrativa el demandante tiene que: **i)** Presentar una solicitud escrita a la entidad de seguridad social en la que se solicite el derecho que será objeto de la eventual demanda; **ii)** Dicha reclamación debe coincidir con las pretensiones de la eventual demanda, es decir, debe haber una relación de correspondencia o semejanza entre el objeto de la reclamación y las súplicas de la demanda; **iii)** Para entender cumplido el anterior trámite, el reclamante (eventual pretensor) debe esperar que se cumpla el plazo legal para que se le resuelva, y si transcurrido dicho lapso no ha habido respuesta por parte de la entidad o entidades, se encuentra legitimado para incoar la correspondiente

acción, de igual manera si se despacha desfavorablemente su solicitud, a través de la respuesta.

Ahora, el objeto de la reclamación previa, tiene como uno de los propósitos que la entidad frente a la cual se presenta, pueda conocer previamente las pretensiones del interesado y tomar la decisión directa y autónoma frente a las mismas; lo que se traduce en la posibilidad de reconocer el derecho y acceder a lo pedido sin necesidad de acudir a los estrados judiciales, lo que resulta un requisito de simple lógica, pues no se puede considerar que existe un conflicto cuando el derecho no debe ser reconocido de oficio, y no ha sido reclamado de quien se pretende.

En el caso concreto, tenemos que la accionante presentó ante PORVENIR S.A., el 11 de julio de 2022, un derecho de petición en el que solicitaba el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes desde el fallecimiento de su hija LUZ MERY ÁLVAREZ PEREA, junto con el retroactivo pensional, intereses moratorios o subsidiariamente indexación (folios 28 a 33 del archivo N°1 del expediente digital de primera instancia).

La sociedad accionada, procedió a dar contestación a la demandante mediante comunicación del 27 de julio de 2022 (folio 62 del archivo N°4 del expediente digital de primera instancia), en la que le informaron lo siguiente:

“En atención a su solicitud, relacionada con el reconocimiento de la pensión de beneficio pensional de sobreviviente con ocasión al fallecimiento de nuestra afiliada la señora, LUZ MERY ÁLVAREZ PEREA, nos permitimos comunicarle lo siguiente:

1. Validando la información en nuestro sistema como también en los aplicativos, le indicamos que fue concluido el proceso de reconstrucción de historia laboral, razón por la cual se le solicito acercarse a la Oficina Porvenir más cercana para proceder con los trámites de radicación.

2. Así las cosas, con el fin de agilizar el proceso de radicación de estudio de reconocimiento de beneficio pensional, es necesario que acercarse a la Oficina Porvenir más cercana, con cita previa, la cual podrá solicitar a través de nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá al 7447678, en Medellín 6041555, en Barranquilla 3855151, en Cali 4857272 o a nivel nacional al 018000510800, donde un consultor especializado en el tema gustosamente le atenderá y brindará la información necesaria para el trámite respectivo y revisando que la documentación y datos se encuentren en orden.

En este orden de ideas le aclaramos que una vez radicado el caso procederemos con el pago de los derechos causados una vez definida la situación pensional.”

Posteriormente, puede evidenciarse que la entidad accionada requirió a la demandante para que se acercara a una de sus oficinas con el fin de radicar la documentación necesaria para continuar con el trámite de reconocimiento de la

pensión de sobrevivientes, no obstante, no hay prueba que la actora haya realizado tal actuación. Fue por lo anterior, que PORVENIR S.A. el 13 de agosto de 2022 (folios 64 y 65 del archivo N°4 del expediente digital de primera instancia), emitió nueva comunicación en la que señaló lo siguiente:

“En esta oportunidad queremos informarte que han transcurrido 60 días calendario, desde que finalizó de forma exitosa la conformación de tu historia laboral, en calidad de APODERADO(A), del(a) afiliado(a) LUZ MERY ÁLVAREZ PEREA, y a la fecha no recibimos la radicación de tu solicitud de beneficio pensional.

Así las cosas, al no haber entregado los documentos para la solicitud de tu beneficio pensional en el tiempo que te habíamos informado, tu proceso fue terminado sin finalizar y deberás presentar una nueva solicitud de validación de requisitos de beneficio pensional desde el paso 1 “Conformación de Historia Laboral”, a través de nuestros canales de servicio.”

Para la Sala, la exigencia de PORVENIR S.A., de requerir a la actora para la aportación de documentos adicionales, encuentra respaldo legal en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 7155 de 2015, Ley que como ya se dijo, conforme su Artículo 33 le es aplicable a las peticiones ante las AFP privadas. El Art. 15 de la citada Ley establece lo siguiente:

“...Presentación y radicación de peticiones. Las peticiones podrán presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o por escrito, y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este código.

Cuando una petición no se acompañe de los documentos e informaciones requeridos por la ley, en el acto de recibo la autoridad deberá indicar al peticionario los que falten.

Si este insiste en que se radique, así se hará dejando constancia de los requisitos o documentos faltantes. Si quien presenta una petición verbal pide constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta.

Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito, y pondrán a disposición de los interesados, sin costo, a menos que una ley expresamente señale lo contrario, formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento. *En todo caso, los peticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular con su petición argumentos, pruebas o documentos adicionales que los formularios no contemplen, sin que por su utilización las autoridades queden relevadas del deber de resolver sobre todos los aspectos y pruebas que les sean planteados o presentados más allá del contenido de dichos formularios...”* (negrillas agregadas)

Así las cosas, al permitírsele a las entidades de seguridad social, como en este caso lo es PORVENIR S.A. exigir la verificación y aportación de documentos adicionales, hasta tanto la reclamante no cumpla con estos parámetros y aporte la documentación con la que se le pueda decidir administrativamente, en principio, no puede entenderse

que agotó la reclamación, pues la entidad contra la cual se presenta no ha tenido la oportunidad de decir sobre el derecho pretendido que es el fin último de la reclamación.

No obstante, en este caso concreto, tenemos que la accionante presentó ante PORVENIR S.A., el 11 de julio de 2022, un derecho de petición en el que solicitaba el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes desde el fallecimiento de su hija LUZ MERY ÁLVAREZ PEREA, (folios 28 a 33 del archivo N°1 del expediente digital de primera instancia). La sociedad accionada, procedió a dar contestación a la demandante mediante comunicación del 27 de julio de 2022 (folio 62 del archivo N°4 del expediente digital de primera instancia), por lo que se debe entender que la reclamación sí fue presentada, sin embargo en tal respuesta, PORVENIR S.A., no le indica a la accionante qué documentación es la faltante, sino que le indica que debe radicar la petición nuevamente, lo que no se aviene con lo dispuesto en el Artículo 17 de la Ley 7155 de 2015, que preceptúa lo siguiente:

“Artículo 17. *Peticiones incompletas y desistimiento tácito.* En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición.

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.”

Acorde a la anterior norma legal, como en este caso, como la reclamación de la pensión, ya había sido presentada, por la actora, PORVENIR S.A., no podía legalmente exigirle, que la presentara nuevamente, sino indicarle de manera precisa, qué documentación era la faltante para decidir, sin que, en la respuesta ya mencionada, se le indicara a la accionante qué documentación adicional era la que debía aportar, por lo que al PORVENIR S.A. no haber actuado conforme a derecho, para decidir sobre el derecho pensional reclamado por la demandante, se debe entender que surgió el conflicto entre ella y la AFP, en razón a que su petición sí fue

radicada y no se le dio el trámite que legalmente correspondía, lo que la habilitaba para acudir a la justicia para que su caso sea resuelto.

Las razones antes expuestas, imponen la revocatoria del auto impugnado, para en su lugar declarar no probada la excepción previa, por las razones expuestas por la Sala.

Costas en primera instancia a favor de la demandante y cargo de PORVENIR S.A., las que serán fijadas por la *a quo*.

Sin costas en esta instancia por haber prosperado el recurso de apelación.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto interlocutorio apelado proferido por el JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN el 12 de abril de 2023 que declaró probada la excepción previa de FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA propuesta por PORVENIR S.A., dentro del presente proceso ordinario laboral de primera instancia, instaurado por la señora MARÍA MATILDE PEREA PEREA en contra de PORVENIR S.A., para en su lugar DECLARAR que no prospera tal excepción, por las razones expuestas en esta instancia.

SEGUNDO: Costas en primera instancia a favor de la demandante y cargo de PORVENIR S.A., las que serán fijadas por la *a quo*.

Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS.

Devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

Se firma en constancia por los que intervinieron en la decisión, los Magistrados,

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° 139 del 14 DE AGOSTO DE 2023.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>

ACLARACIÓN DE VOTO
MAGISTRADO JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ

Medellín, once (11) de agosto de 2023

Referencia	Proceso ordinario laboral
Demandante	MARÍA MATILDE PEREA PEREA
Demandado	PORVENIR S.A.
Radicado:	05001-31-05-015-2022-00344-01

Comparto la decisión de la Sala en cuanto revoca la de primera instancia que declaró probada la excepción previa de *falta de agotamiento de la reclamación administrativa*, para en su lugar declararla impróspera; sin embargo, me aparto de algunos de los argumentos expuestos en la parte motiva, por lo cual ACLARO mi voto en el siguiente sentido:

1.- Dentro del cuerpo de la decisión en esta instancia, básicamente se indica que en casos como el presente en el cual es demandado un Fondo de pensiones de naturaleza privada, no opera la reclamación administrativa de que trata el artículo 6º del CPTSS; no obstante, a renglón seguido se aduce que existen otras normas jurídicas que llevan a la conclusión de que la reclamación previa de un derecho a la seguridad social, es necesaria para acudir a la jurisdicción, incluso en la AFP privadas.

Luego de enlistar una serie de normas de diversa fuente, concluye la mayoría que, *“respecto de las Administradoras de Fondo de Pensiones privadas, es necesario peticionar administrativamente la prestación que se reclama antes de demandar judicialmente, pues solo ante su negativa o su silencio, una vez cumplido el término legal para decidir, se puede considerar que existe un conflicto que debe resolver la jurisdicción, (...)”*

Y más adelante, advierte que:

*“De esta manera, para entenderse agotado el trámite de la reclamación administrativa el demandante tiene que: **i)** Presentar una solicitud escrita a la entidad de seguridad social en la que se solicite el derecho que será objeto de la eventual demanda; **ii)** Dicha reclamación debe coincidir con las pretensiones de la eventual demanda, es decir, debe haber una relación de correspondencia o semejanza entre el objeto de la*

*reclamación y las súplicas de la demanda; **iii)** Para entender cumplido el anterior trámite, el reclamante (eventual pretensor) debe esperar que se cumpla el plazo legal para que se le resuelva, y si transcurrido dicho lapso no ha habido respuesta por parte de la entidad o entidades, se encuentra legitimado para incoar la correspondiente acción, de igual manera si se despacha desfavorablemente su solicitud, a través de la respuesta. “*

2.- A mi modo de ver, se están imponiendo unas exigencias previas a la demanda laboral cuando se dirige en contra de Fondos privados de pensiones, que la ley no establece, pues, aunque se precise en el proyecto de fallo que no se trata de dar aplicación en sentido estricto a la reclamación administrativa de que trata el artículo 6º del CPTSS, se termina creando un factor de competencia, o bien un requisito de procedibilidad, con otro nombre, pero por el mismo concepto, ni más ni menos.

3.- Solo el legislador puede reglar los factores de competencia o requisitos de procedibilidad como condición previa a la iniciación del proceso judicial, tal cual lo hizo cuando se trata de las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales o cualquiera otra entidad de la administración pública, como un privilegio del Estado dado el interés público que representan, pero tal instituto no es dable extenderlo a los particulares por parte de los jueces, y, desde luego, tampoco es posible fijar o determinar trámite alguno al respecto.

4.- El hecho, por ejemplo, que el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001, norma que define la competencia de la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social, diga que esta conoce de **“Las controversias** relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social ...” que es uno de los argumentos de la mayoría, no traduce necesariamente en que sea indispensable agotar una reclamación previa ante el Fondo privado de pensiones, pues, con esa misma lógica, habría que exigir el reclamo previo en los casos de que tratan los numerales 1º y 6º de la misma norma, que hablan, respectivamente, de **“1. Los conflictos jurídicos** que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo”, o bien, **“6. Los conflictos jurídicos** que se originen en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado,

cualquiera que sea la relación que lo motive", exigencia que, evidentemente, nunca se ha ventilado en los estrados judiciales.

Con estas breves consideraciones dejo asentado mi disenso parcial con los motivos expuestos en el auto referido, si bien, repito, acompaño la decisión final.

JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ
Magistrado.

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia
Firma Con Aclaración De Voto

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **441a771d91154172cf96800625b5219650518719e8ba1bbb13bd8211dd810a68**
Documento generado en 11/08/2023 01:54:12 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>